

Compañeros y compañeras, madrileños y madrileñas:

¡Que nos oigan! ¡Que nos escuchen bien! Hoy no estamos aquí para suplicar. Hoy, 4 de junio, estamos aquí para reclamar una deuda histórica que la Comunidad de Madrid se niega a saldar.

Mientras en los despachos de arriba se acumulan las promesas, en las residencias y centros de día de abajo se acumula el abandono, la precariedad y el sufrimiento.

Las personas que hoy viven o malviven en residencias y centros de día fueron los niños y niñas de la Guerra Civil y de la posguerra. Sobrevivieron al hambre, al racionamiento y a la miseria. Reconstruyeron un país devastado por la guerra y levantaron la sociedad de la que hoy todos disfrutamos.

Representan el 18% de la población de Madrid. Quédense con esa cifra: el 18%. Y no están pidiendo caridad.

Están exigiendo el derecho a envejecer con la dignidad que la administración les está arrebatando.

La frialdad de sus cifras es, en realidad, violencia institucional. Porque mantener el sistema actual es defender lo indefendible.

Hoy hemos traído **13.525 firmas**: firmas de trabajadores y trabajadoras, de familiares y de una sociedad que se niega a mirar hacia otro lado. Y no sólo de Madrid. Porque esta lucha no debería ser solo de un sindicato ni de quienes trabajan en el sector. Esta es una exigencia colectiva. La sociedad entera espera respuestas.

En Madrid, las familias se ven obligadas a pagar más de 3.000 € por plazas privadas ante la falta de plazas públicas. Y, aun así, la Comunidad de Madrid presume de una ratio de 0,35 profesionales por usuario, ocultando en esa cifra a jardineros, cocineros y personal no asistencial. Pero la realidad es otra: la atención directa está bajo mínimos.

Las profesionales que cuidan hoy de aquellos niños y niñas de la guerra y la posguerra cobran por debajo incluso del SMI.

Pretender ofrecer cuidados de calidad a costa de exprimir a las trabajadoras es una auténtica vergüenza.

La Comunidad de Madrid anuncia un incremento del 10% en el presupuesto para 2026, pero lo diluye entre mayores, discapacidad y dependencia. Y luego lo llaman "gasto social".

Porque para ellos somos gasto.

Nunca han entendido que invertir en residencias y centros de día es invertir en cuidados y bienestar y no una partida que recortar o externalizar.

Y, de un presupuesto autonómico que supera los 30.000 millones de euros, las migajas vuelven a acabar en el mismo lugar de siempre.

Porque el 93% de las residencias y centros de día están en manos privadas. El dinero público no se invierte en mejorar habitaciones, alimentación o salarios. Se desvía a los beneficios empresariales de quienes mercantilizan los cuidados y hacen negocio con las personas más vulnerables: nuestros mayores.

Y frente a quienes dicen que no hay alternativa, pongamos un ejemplo real: Navarra.

Una comunidad uniprovincial como Madrid, con una población envejecida incluso mayor – un 20%, frente al 18% madrileño – y con un presupuesto cinco veces inferior, alrededor de 6.000 millones de euros.

Allí sí se ha decidido priorizar los cuidados. Su nuevo convenio garantiza salarios mínimos de 1.500 euros, reducción de jornada y una inversión anual de 30 millones de euros destinada exclusivamente a residencias.

Por tanto, sí se puede. No es una cuestión de recursos. Es una cuestión de voluntad y de decencia política.

La situación actual es indigna y propia de un sistema agotado. Solo una inversión pública suficiente y una apuesta decidida por la gestión pública de los cuidados podrán frenar este saqueo.

Y hoy, 4 de junio, frente a la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, lo decimos alto y claro:

¡Se les ha acabado el tiempo de mirar hacia otro lado!

